



Superservicios

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



EDNP

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010023515 DEL 04/07/2014

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007; en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de PALESTINA, departamento de HUILA, es de categoría 6, y fue prestador directo de los servicios de alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010007695 del 20 de marzo de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de PALESTINA departamento de HUILA por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013, así:



Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

- a) Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
- b) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010007695 del 20 de marzo de 2014.

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010007695 se envió citación al señor alcalde del municipio de PALESTINA, del departamento de HUILA, mediante el oficio No. SSPD 20144010161331 del 20 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 28 de marzo de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Atendiendo la anterior citación, compareció ante esta entidad el día 10 de abril de 2014 el señor Wilson Jesús Castillo Ortiz, alcalde municipal de PALESTINA, del departamento de HUILA, quien se notificó en forma personal del citado acto administrativo.

Ahora bien, el señor Wilson Jesús Castillo Ortiz en su calidad de alcalde del municipio de PALESTINA, del departamento de HUILA, otorgó poder al doctor Alexi Farid Catro Pizo, para que interpusiera recurso de reposición en contra de la resolución SSPD 20144010007695, del 20 de marzo de 2014. El doctor Castro Pizo, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290207492 del 28 de abril de 2014 y 20145290224892 del 05 de mayo de 2012, presentó recurso de reposición en contra la referida Resolución.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el apoderado del municipio de PALESTINA, del departamento de HUILA; además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290207492 del 28 de abril de 2014 y 20145290224892 del 05 de mayo de 2012, éste último enviado por correo certificado el 28 de abril de 2014, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del apoderado del ente territorial:

"1. Que mediante decisión dictada, por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el acto administrativo, Resolución No. SSPD - 20144010007695, se resuelve descertificar al Municipio de Palestina en relación con la administración de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico.

2. Que la Superintendencia menciona dos aspectos para descertificar al ente territorial que tienen que ver con: a) haber reportado extemporáneamente el acto de aprobación de las tarifas y b) El no adjuntar las invitaciones consagradas en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

3. Frente al primer punto, sobre el haber reportado extemporáneamente el acto de aprobación de las tarifas, se considera que es desproporcionada la sanción de no se certificar al municipio como quiera que el acto administrativo si existe y en lo que se fallo (sic) fue en un requisito formal como es el del reporte en su oportunidad.

4. En lo que respecta de no adjuntar las invitaciones se tiene que por interpretación legal la publicación de la invitación se hizo en un medio escrito de circulación regional y en la

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

página web, tal como consta en el aviso realizado en el diario del Huila. Es de advertir que la invitación se realizó en el año 2011, tal como consta en la publicación en página web. Es de advertir que si bien no se hicieron las invitaciones consagradas en el numeral 6.1 y 6.2 se cumplió con la finalidad de enterar a las empresas de servicios públicos, a los municipios, departamento y la nación”.

Por lo anterior, solicitó se revocara el acto administrativo impugnado.

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con los documento radicados en esta entidad con No. SSPD 20145290207492 del 28 de abril de 2014 y 20145290224892 del 05 de mayo de 2012, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Constancia expedida por la secretaria del Concejo Municipal de Palestina, en la que señaló que el Acuerdo No. 002 del 10 de febrero de 2014, fue debatido den dos sesiones por el Concejo municipal. (Folio 7).

3.3.2. Proyecto de acuerdo No. 002 “Por el cual se autoriza al alcalde municipal para firmar contratos y convenios” (Folio 8-9);

3.3.3. Páginas ilegibles. (Folio 10-11);

3.3.4. Documentos que acreditan la condición de alcalde del señor Wilson de Jesús Castillo, del municipio de Palestina. (Folios 12-21);

3.3.5. Página ilegible. (Folio 22);

3.3.6. Pantallazo del Sistema Electrónico de Contratación Pública – ilegible (Folio 23);

3.3.7. Resolución Administrativa No. 45 del 27 de abril de 2011, “*Por medio de la cual se ordena la apertura de la licitación pública 029 de 2011*”, cuyo objeto era seleccionar una empresa de servicios públicos domiciliarios legalmente constituida para operar, administrar y prestar los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y aseo en el municipio de Palestina. (Folio 24-26).

3.3.8. Pliego de condiciones definitivo de la licitación pública No. 29 de 2011. (Folios 27-62).

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio: “Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, (...)”.

Frente a este criterio alega el municipio que el “*no adjuntar las invitaciones se tiene que por interpretación legal la publicación de la invitación se hizo en un medio escrito de circulación regional y en la página web, tal como consta en el aviso realizado en el diario del Huila. Es de advertir que la invitación se realizó en el año 2011, tal como consta en la publicación en página web. Es de advertir que si bien no se hicieron las invitaciones consagradas en el numeral 6.1 y 6.2 se cumplió con la finalidad de enterar a las empresas de servicios públicos, a los municipios, departamento y la nación*”.

De cara a los argumentos expuestos por el recurrente, este Despacho considera oportuno traer a colación lo preceptuado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 6º:

“Artículo 6o. Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada (...).

Ahora bien, el Decreto 1639 de 2013 en su artículo 5° dispone como uno de los criterios que deben cumplir los municipios prestadores directos:

"Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1) y a otros municipios, al Departamento, a la Nación y a otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos (numeral 6.2).

2. Documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 de la Ley 142 de 1994.

3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio".

Es decir, para que el artículo 6° se agotara correctamente, el ente territorial debió acreditar el cumplimiento de las siguientes etapas para los numerales 6.1 y 6.2, con el cargue al SUI de los siguientes documentos: 1. Invitación, 2. Publicación, y 3. Cierre. Así las cosas, en el evento de faltar alguna o de haberla realizado de forma incorrecta, se tenía por no cumplido el criterio.

Así las cosas, el trámite que debió surtir el municipio de Palestina era el siguiente:

- En relación con las invitaciones:

1. En primera instancia, hacer una invitación pública a las empresas de servicios públicos constituidas, para que si alguna empresa está interesada, ofrezca la prestación del servicio(s) requerido(s). (Numeral 6.1)

2. En segunda instancia, es decir, no existiendo empresas que se ofrezcan a prestar el (los) servicio(s), debe hacer una invitación a otros municipios, al Departamento del cual hace parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas con el fin de organizar una empresa de servicios públicos. (Numeral 6.2)

Ahora bien, en la Circular Externa No. 001 de 2010, esta superintendencia al analizar el agotamiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, señaló específicamente frente a las invitaciones:

"En lo que respecta a los procedimientos de convocatoria a prestadores interesados y siendo que la norma no señala ninguna restricción frente al desarrollo de las mismas, debe concluirse que los municipios pueden desarrollar las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 de la Ley 142 de 1994, de manera secuencial o de manera conjunta, dado que en ambos casos el objetivo de la norma se cumple a cabalidad. No obstante lo anterior, en el caso de convocatorias conjuntas, sólo puede entenderse agotado el procedimiento previsto en el artículo 6. de la Ley 142 de 1994, cuando en un sólo acto de convocatoria un municipio invita tanto a empresas de servicios públicos (Numeral 6.1) como a otros entes públicos y privados (Numeral 6.2), describiendo de forma completa el objeto de cada una de las convocatorias, esto es, la correspondiente a la prestación del servicio y la que se dirige a la constitución de una empresa respectivamente".

Bajo este panorama normativo, la SSPD para la vigencia 2012, verificó que el ente municipal agotara en su integridad el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, conforme al análisis que se efectuó en el acto objeto de impugnación.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Así las cosas y hecha la anterior aclaración, este Despacho analizará en esta decisión, el trámite que surtió el ente municipal frente al agotamiento de las invitaciones señaladas en los numerales 6.1 y 6.2, y para tal efecto revisará nuevamente lo cargado por el municipio en el aplicativo INSPECTOR del SUI.

Verificado el aplicativo mencionado, esta entidad verificó otra vez, que el ente municipal no cargó las invitaciones de que tratan los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, tal y como lo evidencia la siguiente imagen:

[SSPD] - Detalle de la Meta

Reporte Metas	Reporte Metas Control Avance	Reporte Indicadores	Reporte Indicadores Control Avance										
Datos del Prestador													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nacionalidad ALCALDIA MUJILA-PALESTINA </td> <td style="width: 50%;"> Identificación 0-0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ACUERDO - ALCANTARILLADO - ABU - </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Fecha de otorgamiento 13/06/2018 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Fecha de vencimiento 15/05/2018 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Documento de Plan de Acción ANEXO adjunto </td> </tr> </table>				Nacionalidad ALCALDIA MUJILA-PALESTINA	Identificación 0-0	ACUERDO - ALCANTARILLADO - ABU -		Fecha de otorgamiento 13/06/2018		Fecha de vencimiento 15/05/2018		Documento de Plan de Acción ANEXO adjunto	
Nacionalidad ALCALDIA MUJILA-PALESTINA	Identificación 0-0												
ACUERDO - ALCANTARILLADO - ABU -													
Fecha de otorgamiento 13/06/2018													
Fecha de vencimiento 15/05/2018													
Documento de Plan de Acción ANEXO adjunto													

ver Anexo

Detalle de la Meta

Meta	Condiciones para operar los SPD
Meta 2.1) INVITACION PÚBLICA a empresas de servicios públicos (Artículo 8.1 de la Ley 142 de 1994). 2.2) CONTRATACIÓN PÚBLICA a otras personas, al Departamento, a la Nación o a otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos. (Artículo 8.3 de la Ley 142 de 1994).	CONDICIONES PARA OPERAR LOS SPD Alupción cumplimiento Art. 8 Ley 142/94
Alcaldía 13-ago-2018	

Autor	Fecha de creación	Comentarios	Documento
DELEGADA TRIPLE AAA	13-ago-2018	Se rechaza debido a que este año a la publicación de la invitación a esp para que presten los servicios de alcantarillado y agua en el municipio de Palestina, sin embargo no reporta los documentos de invitación y la declaración de desierta de esta invitación (Art. 6.1 de la ley 142 de 1994). Así mismo no reporta ningún documento que soporte el cumplimiento de la segunda invitación (Art. 6.2 de la Ley 142 de 1994)	
ALCALDIA MUJILA-PALESTINA	01-ago-2018	SE ANEXA PUBLICACIÓN	Archivo adjunto
DELEGADA TRIPLE AAA	17-jul-2018	PARA ADOPTAR EL INDICADOR 2.1 EL MUNICIPIO REPORTA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO DE EL MULA EL 11 DE ABRIL DE 2018, DOCUMENTO QUE NO LE PERMITE CUMPLIR CON LA PRESENTE META, SE REQUERIDA QUE PARA ACREDITAR EL INDICADOR 2.1 DEBE REPORTAR CADA UNA DE LAS INVITACIONES DE QUE TRABA EL ARTICULO 8 DE LA LEY 142 DE 1994 ASI INVITACIÓN EN PRIMER LUGAR A ESP PARA QUE SE OFERZCAN A PRESTAR LOS SERVICIOS (NUM 6.1) Y EN SEGUNDO LUGAR LA INVITACIÓN A OTROS MUNICIPIOS, AL DEPARTAMENTO DEL CUAL HACEN PARTE, A LA NACION Y A OTRAS PERSONAS PUBLICAS O PRIVADAS PARA ORGANIZAR UN ESP. EN CASO DE HABERLAS REALIZADO EN UN MISMO ACTO EN EL DEBE APARECER EN FORMA COMPLETA EL OBJETO DE CADA UNA DE ELLAS. EN RELACION CON LAS INVITACIONES SE RECUERDA LO SEÑALADO POR ESTA SUPERINTENDENCIA EN EL CONCEPTO 01 DE 2018 EN EL CUAL INDICÓ: "SOBRE ESTE PUNTO, SE ACLARA QUE DICHA INVITACIÓN NO ES EN NINGUN CASO UNA LICITACIÓN PÚBLICA QUE DEBA REGIRSE POR EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RAZÓN POR LA CUAL TAMPOCO DEBE DAR LUGAR A UN ACTO DE CONTRATACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA QUE ENTRE A PRESTAR EL SERVICIO".	
DELEGADA TRIPLE AAA	17-jul-2018	PARA ADOPTAR EL INDICADOR 2.1 EL MUNICIPIO REPORTA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO DE EL MULA EL 11 DE ABRIL DE 2018, DOCUMENTO QUE NO LE PERMITE CUMPLIR CON LA PRESENTE META, SE REQUERIDA QUE PARA ACREDITAR EL INDICADOR 2.1 DEBE REPORTAR CADA UNA DE LAS INVITACIONES DE QUE TRABA EL ARTICULO 8 DE LA LEY 142 DE 1994 ASI INVITACIÓN EN PRIMER LUGAR A ESP PARA QUE SE OFERZCAN A PRESTAR LOS SERVICIOS (NUM 6.1) Y EN SEGUNDO LUGAR LA INVITACIÓN A OTROS MUNICIPIOS, AL DEPARTAMENTO DEL CUAL HACEN PARTE, A LA NACION Y A OTRAS PERSONAS PUBLICAS O PRIVADAS PARA ORGANIZAR UN ESP. EN CASO DE HABERLAS REALIZADO EN UN MISMO ACTO EN EL DEBE APARECER EN FORMA COMPLETA EL OBJETO DE CADA UNA DE ELLAS. EN RELACION CON LAS INVITACIONES SE RECUERDA LO SEÑALADO POR ESTA SUPERINTENDENCIA EN EL CONCEPTO 01 DE 2018 EN EL CUAL INDICÓ: "SOBRE ESTE PUNTO, SE ACLARA QUE DICHA INVITACIÓN NO ES EN NINGUN CASO UNA LICITACIÓN PÚBLICA QUE DEBA REGIRSE POR EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RAZÓN POR LA CUAL TAMPOCO DEBE DAR LUGAR A UN ACTO DE CONTRATACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA QUE ENTRE A PRESTAR EL SERVICIO".	
ALCALDIA MUJILA-PALESTINA	23-may-2018	Se carga la publicación realizada en el Diario del Mula.n	Archivo adjunto

Tal situación es reconocida y aceptada por el representante del municipio en su recurso, al indicar que *"si bien es cierto no se hicieron las invitaciones consagradas en el numeral 6.1 y 6.2 se cumplió con la finalidad de enterar a las empresas de servicios públicos, a los municipios, departamento y la nación"*.

Ahora bien, el recurrente allega con su recurso de reposición copia de la Licitación Pública No. 29 del 30 de marzo de 2011, cuyo objeto fue: *"Seleccionar una empresa de servicios públicos domiciliarios legalmente constituida para operar, administrar y prestar los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y aseo en el municipio de Palestina-Huila"*, al respecto es necesario traer a colación lo señalado por la Oficina Asesora Jurídica de esta superintendencia, en la Circular 01 antes mencionada, así:

"El procedimiento establecido en el Artículo 6 de la Ley 142 de 1994, carece de reglamentación en la actualidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Artículo 13.5.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 que regulaba esta materia fue declarado nulo por el Consejo de Estado³.

Sin embargo, hay que aclarar que cuando los municipios acudan al trámite del Artículo 6 citado, sólo pueden hacerlo en aquellos casos en que no se trate de entregar la infraestructura a un tercero para que haga la operación del servicio, pues en tal caso se tienen que sujetar a lo previsto en el parágrafo del Artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y adelantar el proceso de licitación conforme a lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública."

Es claro, entonces que el agotamiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994 no se adelanta a través de licitación pública, sino de invitación pública. Aunado a lo anterior, el recurrente no allegó copia del acto de cierre de la invitación señalada en el numeral 6.1 de la Ley 142, como tampoco anexó ni reportó en el SUI

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

la invitación, publicación y acto de cierre de la invitación relacionada con la creación de una empresa de servicios públicos señalada en el numeral 6.2 del artículo 6 varias veces mencionado.

Respecto a la interpretación del apoderado del municipio, esta SSPD señala que tal omisión no puede subsanarse con el reporte de la publicación de las invitaciones, ya que éstas – las invitaciones – configuran la voluntad de la administración respecto a los parámetros bajo los cuales se regirán los eventuales proponentes, ya que en estas se indican i) a quiénes se dirigen, ii) su objeto; iii) el plazo; iv) lugar de presentación; v) medio de publicación; es decir, las invitaciones reglamentan todo lo relacionado con el proceso señalado en el artículo 6, y por consiguiente, esta entidad debe verificar que lo dispuesto en la invitación se plasme en la publicación, y por lo tanto, el reporte de la publicación en el SUI no reemplaza el cargue de las invitaciones establecida en el artículo 5º del Decreto 1639 de 2013.

De otra parte, en consideración de esta entidad no se está realizando un juicio de legalidad o validez a los actos administrativos (invitaciones); sino que se está revisando que el procedimiento establecido en el artículo 6º de la Ley 142 de 1994, el cual fue recogido por el Decreto 1639 de 2013, se haya agotado de forma adecuada.

Recuérdese que la SSPD tiene dentro de sus funciones la de adelantar *“el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4o de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los criterios que se establecen a continuación, en el año calendario inmediatamente anterior.”*, y con fundamento en dichas funciones, no puede inobservar la situación aquí presentada, actuar de modo contrario conduciría a que no cumpliera con su labor de verificación de acreditación de los criterios por parte de los entes territoriales en desarrollo del proceso de certificación del SGP-APSB.

Por consiguiente, este criterio no lo cumplió el ente municipal.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio: “Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema”.

Manifiesta el municipio que es *“desproporcionada la sanción de no certificar al municipio”* por haber reportado extemporáneamente el acto de aprobación de las tarifas, toda vez que el acto administrativo si existe y *“en lo que se fallo (sic) fue en un requisito formal como es el del reporte en su oportunidad”*.

En relación con lo alegado por el ente municipal, este ente de control considera oportuno informarle al recurrente, de cara a sus aseveraciones que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB es un procedimiento administrativo, que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, hemos de dirigirnos frente a lo se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos: *“Esta Corporación ha definido el debido proceso administrativo como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”*. (Corte Constitucional, actuación T-2.897.231, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fallo del 16 de diciembre de 2011).

Igualmente, esa Corporación expresó, que: *“(…) el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo I del Título I del C.C.A., referente a los principios generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y*

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

etapas procesales descritas en la ley". (Corte Constitucional. Sentencia T-1162 de 2005. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto).

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Ahora, frente a lo afirmado por el apoderado el municipio de Palestina que el hecho de haber cargado en el SUI extemporáneamente el acto de aprobación de tarifas, no puede tomarse como válido para la descertificación, esta SSPD debe indicar:

En primer lugar debe advertirse que el Decreto No. 1639 de 2013 señaló como criterio para la vigencia 2012, el "Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de información al sistema".

Así mismo, la citada normatividad estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los criterios tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones; así las cosas, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la referida disposición, la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013. Es decir, que los Municipios y Distritos contaban con unos términos claros, precisos y perentorios los cuales esta superintendencia como autoridad certificadora debía corroborar; actuar en otro sentido obviando tal señalamiento, sería desconocer el principio de legalidad y poner en situación de desigualdad a aquellos Entes que se les exigió el cumplimiento de los requisitos conforme a los parámetros ya mencionados.

No obstante lo señalado, el municipio de Palestina cargó en el SUI el 03 de septiembre de 2013, la Resolución No. 007 de 2008, mediante la cual se adoptaron las tarifas para los servicios de alcantarillado y aseo en el ente territorial; es decir, dicho reporte lo efectuó por fuera del plazo señalado en el Decreto Reglamentario.

En estas condiciones y partiendo que el artículo 7°, ibidem, es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, "*Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley*", se concluye que el cargue realizado en el mes de septiembre de 2013 por el municipio de Palestina, para el formato acto aprobación de tarifa fue extemporáneo.

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5° de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1040 de 2012, según la cual, si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no hubiera reportado la información señalada en el Decreto 1639 de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP-APSB y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, ello hace que la medida de descertificar a un municipio o distrito que no atendió lo señalado en el Decreto 1639 de 2013, en la forma y plazos allí señalados, no sea desproporcionada.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento de los requisitos que se le demandan; por lo tanto el recurso formulado por el doctor Alexi Farid Castro Pizo, como apoderado del municipio, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010007695 del 20 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de PALESTINA, departamento de HUILA, y al apoderado del municipio, doctor Alexi Farid Castro Pizo, haciéndoles entrega de una copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de HUILA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato Vargas - Contratista Grupo de Certificaciones e información
Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información
Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e información
Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Expediente: 20094014746080697A